



Poder Judicial de la Nación  
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

**EXPTE: 34.250/2022**

**“SIEGFRIED SA (Ex NOVA SA) c/ADMINISTRACION FEDERAL DE  
INGRESOS PUBLICOS s/IPUGNACION DE DEUDA”**

Sentencia Definitiva

En la Ciudad de Buenos Aires, reunidos los Señores Magistrados integrantes de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar pronunciamiento en la presente causa, se procede a emitir el voto en el siguiente orden:

**EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:**

SIEGFRIED S.A. apela la resolución de AFIP N° 2174-E-2021 que rechaza el recurso de revisión oportunamente interpuesto, desestimando la impugnación deducida respecto de la deuda determinada durante el periodo 05/2010 a 12/2016 por diferencia en las contribuciones patronales de seguridad social por lo que se consideró un incorrecto encuadre en lo dispuesto por el inciso b) del artículo 2° del Decreto 814/01, en lugar de aplicar la alícuota prevista en el inciso a) del mismo artículo y decreto.

El apelante si bien no ha dado cumplimiento a la exigencia impuesta por el artículo 15 de la ley 18.820, disposición normativa a la que tacha de inconstitucional, acompaña un seguro de caución extendido por Fianzas y Crédito S.A. Compañía de Seguros en favor de la demandada (póliza 807.457) por la suma de \$35.980.880,24 entendiendo que garantiza suficientemente la deuda reclamada.

Procederé a la habilitación de la presente instancia dado lo elevado del monto que se reclama, priorizando de este modo el debido derecho a la defensa en juicio (art. 18 CN). Lo anterior responde al criterio amplio propiciado en la materia por el Superior Tribunal de Justicia a fin de evitar que el pago impuesto por el legislador importe un real menoscabo a garantías constitucionales (ver CSJN sent. del 14/05/95 “Sanatorio Otamendi y Miroli” DT 1996-A-319; ídem. sent. del 11/06/98 “Cadesu c/DGI” y “Pandolfi c/DGI” pub. LL 25/02/2010 N° 1143636 entre otros). Por otra parte nuestro Máximo Tribunal ha expresado que la constitución de un seguro de caución es suficiente para garantizar el interés fiscal motivo por el cual constituye sucedáneo valido a los efectos de posibilitar el conocimiento de la presente causa por parte de este Tribunal (CSJN sent. del 04/11/2008 “Orígenes AFJP SA c/Administración Federal de Ingresos Públicos”).

En su memorial recursivo, el apelante plantea la nulidad de la determinación de deuda efectuada por no haber ponderado los antecedentes

Fecha de firma: 30/08/2023

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#36852043#377361120#20230830102039444



## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

acompañados. Sostiene que el organismo actuó arbitrariamente al denegarle la prueba ofrecida incurriendo en falta de motivación al introducir argumentos que ninguna relación guardan con los antecedentes del caso. Expresa que el fundamento del organismo se centra equivocadamente en vincular su pretensión con la calidad de PyME que nada tiene que ver en este caso donde, en su opinión, lo determinante es la actividad que desarrolla pues la misma no se corresponde con las categorías de servicios ni con la de comercio previstas en la norma que el organismo aplica. Pide se conceda beneficio de litigar sin gastos dado lo elevado del monto reclamado. Respecto al plazo prescriptivo sostiene que el artículo 16 de la ley 14.236, es inconstitucional atento lo extenso del plazo que otorga. En su opinión la deuda reclamada es inexistente pues las normas legales vigentes llevan a actuar como lo hizo. A todo evento la suma reclamada estaría prescripta.

La demandada, rechaza las defensas intentadas por su contraria.

En su opinión las mismas resultan meramente dilatorias al no aportar ningún elemento de relevancia para la causa. Niega arbitrariedad en el procedimiento observado pues sostiene que en ningún momento se lesionó el derecho de defensa, más aún si se tiene presente que el interesado cuenta con la posibilidad de acudir a la justicia a fin que se analice el correcto tratamiento de la causa. Expresa en su defensa que el único parámetro que debe tomarse en consideración a los efectos de determinar si un empleador encuadra en el inciso a. o b. del art. 2º del Decreto 814/2001 es su monto de facturación anual, sin perjuicio de la caracterización que le corresponda en el marco de las normas de fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Explica que el importe a considerar a los fines de determinar si el empleador deberá tributar de acuerdo con uno u otro inciso, es el de \$ 48.000.000 establecido por el Decreto N° 1009/01, excedido el cual debió haberse utilizado la alícuota prevista en el inciso a) del artículo 2do. del decreto 814/2001. Afirma que ese límite por el momento no ha sido modificado hasta que el PEN disponga lo contrario. También rechaza la prescripción intentada dado que la notificación de la deuda reclamada (18/09/2018) interrumpió el curso de la misma. Con respecto a la multa reclamada explica que el solo hecho de constatar la infracción genera la procedencia de la sanción impuesta.

En primer lugar corresponde expedirme sobre el beneficio de litigar sin gastos.

Ante la petición incoada esta Sala, solicito al Sr. Representante del Fisco su opinión al respecto.

El citado funcionario se opuso a la concesión del beneficio pretendido argumentando que, de los elementos adjuntados, no surge acreditada la





## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

imposibilidad de obtener recursos para afrontar los gastos del proceso, ni tampoco que las dificultades económicas alegadas provengan de eventos o cuestiones ajenas al giro de la empresa o que fueran imprevisibles para quien asume un riesgo comercial.

Planteada así la cuestión entiendo corresponde rechazar el beneficio de litigar sin gastos pretendido.

Pasaré a analizar los agravios vertidos en la impugnación presentada.

En primer lugar, no resulta aceptable la queja dirigida contra la falta de motivación del acto atacado. Ello por cuanto no se advierte que durante el curso de las actuaciones administrativas se haya afectado la garantía procesal de defensa en juicio y/o se hayan lesionado los derechos del emplazado quien tuvo oportunidad de actuar en el proceso administrativo, siendo atendidas sus defensas y dictándose una resolución fundada que es la que sirve de base a su impugnación.

Con respecto al pedido de inconstitucionalidad dirigido contra el artículo 16 de la ley 14.236, tal agravio tampoco puede ser receptado.

La prescripción es una figura de orden público que hace a la seguridad de las relaciones jurídicas por lo que fijar su magnitud es función privativa del Poder Legislativo.

La sanción del Código Civil y Comercial, no afectó ni la validez ni operatividad de la ley 14.236. En realidad nos encontramos ante una norma administrativa que regula las potestades y facultades de los órganos de control en el campo de la seguridad social. Estamos ante un tema específico que es ajeno al marco de las relaciones privadas reglamentadas por el derecho común.

Cabe recordar, en tal sentido, que la declaración de inconstitucionalidad de una norma configura un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado última ratio del orden jurídico (CSJN 05/09/17, “Lima c/Agon” Fallos 340:1185; 23/04/19, “Aballay c/EN” Fallos 342:685; 03/03/20 “Bernardes c/ENA” Fallos 343:140; 30/04/20 “C. J. C. c/EN – Ministerio de Defensa” Fallos 343:270) siendo la misión más delicada del Poder Judicial la de mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones que ejercen los otros poderes del Estado (CSJN 16/04/21 “Sisti c/EN” Fallos 344:603).

En virtud de lo anterior y teniendo presente que el organismo actuante intimó deuda, por el periodo 05/2010 a 12/2016 con fecha 18/09/2018 -conforme surge de las actas que lucen en la actuación administrativa 18233-71-2018- por aplicación del artículo 16 de la ley 14.236 debe entenderse que el reclamo efectuado no se encuentra prescripto.

Dilucidadas las cuestiones procedimentales, pasare al análisis de la cuestión de fondo que se plantea en el presente recurso.

Fecha de firma: 30/08/2023

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#36852043#377361120#20230830102039444



## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

La ley 24.467 creó un régimen jurídico especial tendiente a promover el crecimiento y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresa considerando tales a aquellas que cuyo plantel no supere los cuarenta trabajadores y tengan una facturación anual inferior a la cantidad que para cada actividad fije un organismo administrativo -Comisión Especial de Seguimiento- que sería la encargada de evaluar el impacto que sobre las relaciones de trabajo tuviera la creación de un régimen laboral especial en la materia (arts. 83 y 105, ley citada). De lo expuesto surge que la noción de pequeña y mediana empresa es fluctuante al menos en materia económica pues, aunque la empresa no llegue a superar los cuarenta trabajadores podría ser considerada una gran empresa cuando su facturación anual supere cierto monto, lo que revelaría su potencialidad económica.

Con posterioridad se sancionó la ley 25.300 –ley de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa- cuyo objetivo sustancial es el fortalecimiento competitivo de dichas entidades aclarándose que la autoridad de aplicación será la que definirá las características de las empresas que serán consideradas micro, pequeñas y medianas aclarando, a tal fin, que entre sus tareas esta de la revisar anualmente la definición de micro pequeña y mediana empresa a fin de actualizar los parámetros y especificidades contempladas en la definición adoptada (ver art.1”, ley citada) que no sería otra que la fijada por imperio del art. 83 de la ley 24.467.

En cumplimiento de los fines establecidos por la ley 24.467 se dictó el decreto 943/97 que creó, en el área gubernamental de la Presidencia de la Nación, la Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa como autoridad de aplicación de la ley 24.467 y es dicha autoridad la que determinó que empresas serían consideradas micro, pequeñas y medianas empresa tomando como referencia que las ventas totales anuales no superasen ciertos valores que eran diferenciados según se tratase de empresas de construcción, servicios, comercio, industria y minería y/agropecuario.

Ahora bien, conocido es mi criterio en cuanto a que con base en el juego armónico de las resoluciones y decretos aplicables, el decreto 1009/2001 ha variado sustancialmente el contenido de la Resolución 24/01 de la SEPyme y, en consecuencia, también los montos a partir de los cuales corresponde aplicar la alícuota numérica atinente a las contribuciones patronales (ver Res. 675/02 de la Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional y distintas Resoluciones posteriores) pero, en el memorial de agravios acompañado, se enfatiza que la elaboración de especialidades medicinales es considerada una industria manufacturera, sea que la producción se lleve a cabo por sí misma o a través de terceros por lo que no puede, a juicio de la apelante, serle aplicada una





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

alícuota del 21% sino que debe encuadrarse tal actividad dentro de “las restantes actividades” que deben tributar una alícuota menor.

En otras palabras, el apelante no discute que es una gran corporación o empresa sino que centra su discrepancia en la actividad que desarrolla – elaboración de especialidades medicinales reglamentada por ley 16.463- entendiendo que tal circunstancia es la que debe determinar que la alícuota a aplicar en su caso es la prevista en el inciso b) del artículo 2° del Decreto 814/01 y no la correspondiente al inciso a).

No advierto que le asista razón en tal planteo.

Ello por cuanto en autos no se discute que, como todo ente que realiza una actividad productiva, se encuentra alcanzada por los lineamientos de los arts. 10 y 11 de la ley 24.241 es decir, la obligación de cotizar al sistema previsional.

En el escrito de impugnación presentado se admite que los productos medicinales elaborados son vendidos en el mercado -ver su referencia al trato sufrido en materia de IVA, al resultar cargados en la primera venta a las farmacias o droguerías, resultando exentos para las ventas posteriores-.

Ahora bien, la ley 16.463 aplicable en autos es una norma específica que tiende a posibilitar un mayor control sobre entidades vinculadas a la importación, exportación, producción, fraccionamiento y comercialización de los productos medicinales tendiente a preservar el derecho a la salud de los consumidores pero no innova en el campo previsional.

Ello así no puede confundirse el campo de aplicación de la norma referida con el ámbito regulatorio establecido por la ley 24.065 -norma que reglamenta la producción de energía eléctrica mayorista- que diera lugar a lo decidido por este Tribunal en los autos “Endesa Costanera c/AFIP” (sent. del 11/12/17 suscripta por el Dr. Dorado y una anterior integración de esta Sala) con una actividad regulada por un marco diferente y el tratamiento privilegiado que, según denuncia, ha adoptado el Estado para la liquidación del IVA con respecto a su persona, lo que no implica que deba adoptarse idéntico criterio en materia previsional pues el derecho de igualdad ante la ley que predica el art. 16 de nuestra Carta Magna radica en consagrar un trato legal igualitario a quienes se hallen en una razonable igualdad de circunstancias, lo que no impide que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes, en tanto dichas distinciones no se formulen con criterios arbitrarios, de indebido favor o desfavor, privilegio o inferioridad personal o de clase, o de ilegítima persecución (Badeni, “Tratado de Derecho Constitucional” T°I pág.354; CSJN 02/06/00 “Guida c/PEN” Fallos 323:1566; 07/02/17 “Cosentino c/Estado Nacional” Fallos 340:14; 09/11/17 “Galíndez c/Ministerio Público Fiscal de la Nación”; 26/03/19 “García c/AFIP”,





## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

Fallos 342:411; 28/10/21, “Costa Ludueña c/UBA”; CNTrab. Sala X 31/07/12 “Lagos c/Galeno Argentina SA”) se busca erradicar las distinciones arbitrarias u hostiles (Bidart Campos, “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino” Tº I pág. 259; Badeni, “Tratado de Derecho Constitucional” Tº I pág. 354; Sagües “Elementos de Derecho Constitucional” Tº II pág. 538) o socialmente disvaliosas.

Cabe tener presente que las normas impositivas tienen un campo de aplicación diferente a las previsionales con finalidades objetivas distintas que pueden llevar a la adopción de políticas diferenciales del Estado en la materia sin que pueda argumentarse la violación de la garantía contemplada por el art. 16 de nuestra Carta Magna.

Sobre el tema la doctrina ha expresado que así como el art. 16 de la CN veda la discriminación arbitraria en perjuicio del contribuyente, prohíbe también privilegiar a ciertas personas o categorías de personas con exenciones o beneficios fiscales, en detrimento de otras. El límite es el de la razonabilidad. En otras palabras, el tratamiento más beneficioso a ciertas categorías de contribuyentes es aceptable solo cuando se funda en razones de programación económica, social o política (conf. Ekmekdjian Miguel A. “Manual de la Constitución Argentina” pág. 138/139 edit. LexisNexis), pero no puede afectar la potestad jurídica del Estado de establecer marcos normativos respecto al complejo campo de las relaciones humanas e institucionales.

Coadyuva al sentido de este voto que la actividad principal declarada por el impugnante durante el periodo objeto de reclamo sea la venta al por mayor de productos farmacéuticos (Código N° 464310) actividad incluida en la sección “G” de “Comercio” del nomenclador de códigos CLANAE 97. En dicha oportunidad también se refiere que la empresa es quien asume la responsabilidad por el conjunto de procedimientos técnicos por medio de los cuales se producen cambios en la naturaleza de los bienes de su propiedad que luego se comercializaran una vez terminados (conf. cuerpo de antecedentes).

Con respecto a la multa impuesta, el apelante entiende que la misma es improcedente pues para la aplicación de una multa es necesario que se acredite el acontecimiento de un hecho típico antijurídico situación que no le es atribuible pues nunca existió un hecho que permita configurar la infracción en su faz objetiva a la vez que tampoco existió intencionalidad ni siquiera a título de culpa de manera que debe rechazarse su imposición pues su obrar respondió en todo momento a la normativa que entendió aplicable.

No puedo compartir tal aseveración dado que en lo atinente al cumplimiento de las exigencias de seguridad social el mero incumplimiento







## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

genera la consiguiente responsabilidad y sanción sin que tenga cabida el elemento subjetivo (ver esta Sala sent. del 19/10/98 “Pilot Pen SA”), y no encuentro en la causa elementos suficientes que justifiquen apartarme de la decisión administrativa que se recurre.

Por último y con respecto a la regulación de honorarios que imponen los artículos 163 y 164 del CPCCN cabe tener presente que la ley 27.423 no puede ser aplicada en autos en forma automática dado que dicho texto legal no contempla expresamente el proceso de impugnación de deuda. Ello así y teniendo presente lo expresado por el Superior Tribunal de la Nación en cuanto a que la regulación de honorarios no debe depender exclusivamente del monto del reclamo sino que deberá ser ponderada por los jueces, bajo pautas de razonabilidad, atendiendo a la naturaleza, complejidad del asunto, mérito de la causa, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado (Fallos 257:142; 296:126; 302:302:534 y sus citas; 320:495; 339:216 entre otros) y lo dispuesto por el artículo 1.255 del Código Civil y Comercial de la Nación se regulan los honorarios correspondientes a la dirección letrada de la parte actora en 65 UMA (\$ 1.256.970). Con respecto a los honorarios de representación letrada de la parte demandada se regulan los mismos en 150 UMA (\$2.900.700) conf. CSJN Ac.19/2023. A dichos importes se adicionara IVA en caso de corresponder.

En atención a lo expresado propongo habilitar la presente instancia de revisión judicial, rechazando el pedido de beneficio de litigar sin gastos. Se confirme la resolución recurrida imponiendo las costas al apelante (art. 68 CPCCN). Fijar los honorarios de representación letrada de la parte demandada en 150 UMA (\$2.900.700) y los correspondientes a la dirección letrada de la parte actora en 64 UMA (\$1.256.970) conf. CSJN Ac.19/2023, importes a los que se adicionara IVA en caso de corresponder.

#### **LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:**

Adhiero al voto que antecede.

#### **EL DOCTOR JUAN FANTINI ALBARENQUE DIJO:**

Adhiero a la propuesta del Doctor Walter F. Carnota.

En virtud de lo expuesto el Tribunal RESUELVE: 1º) Declarar habilitada la instancia judicial, 2º) Rechazar el pedido de beneficio de litigar sin gastos, 3º) Confirmar la resolución recurrida, 4º) Imponer las costas al apelante (art. 68 CPCCN), 5º) Regular los honorarios de representación letrada de la parte demandada en 150 UMA (\$2.900.700) y los correspondientes a la dirección letrada de la parte actora en 64 UMA (\$1.256.970) conf. CSJN Ac.19/2023,





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

importes a los que se adicionara IVA en caso de corresponder. Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente remítase.

NORA CARMEN DORADO  
Juez de Cámara

WALTER F. CARNOTA  
Juez de Cámara Subrogante

JUAN FANTINI ALBARENQUE  
Juez de Cámara

Ante mí: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI  
Secretaria de Cámara

ALP.







Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

